PARAMILITARES Y VIOLENCIA URBANA EN MEDELLÍN, COLOMBIA

RALPH ROZEMA

Introducción

La violencia urbana en Colombia se distingue por la presencia de una gran variedad de grupos armados. Paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, bandas y otros delincuentes han establecido su poder en los barrios populares de las grandes ciudades. Su avance ha sido reforzado por una prolongada ausencia de las autoridades y representantes de la ley en dichos barrios. En su mayoría se trata de comunas de migrantes pobres en busca de oportunidades económicas o de desplazados de áreas violentas en otras partes de Colombia. Estas comunas se caracterizan por altos índices de desempleo y la exclusión de los moradores de los servicios del Estado. Las oportunidades de una carrera dentro de un grupo armado han atraído a los jóvenes de estas comunas por falta de alternativa. En la práctica el poder local no está en manos de personas democráticamente elegidas, sino en las de los nuevos grupos armados (Kruijt, 2004; Leeds, 1996). Adémas, estos actores armados han aprovechado el proceso de globalización: sus crecientes contactos internacionales han facilitado sus ingresos del narcotráfico y la adquisición ilegal de armas (Kaldor, 2001; Tokatlian, 2000).

Desde la década de los ochenta los grupos armados en los barrios periféricos han desempeñado un papel dominante. A lo largo de los años en las ciudades surgieron bandas, combos, milicias, narcotraficantes, grupos de limpieza social, guerrilleros, paramilitares y las llamadas "oficinas", estructuras de alta criminalidad donde se podía contratar a un sicario. Los grupos armados formaron una intrincada red de relaciones de poder. Mientras que parte de los grupos se enfrentaron para controlar el territorio (como los guerrilleros, los paramilitares y algunas de las bandas), provocando miniguerras en las comunas populares, otros se quedaron en el mismo territorio, unos bajo el control de otros. La multiplicidad de las redes armadas significa que los límites de los territorios siempre han sido fluidos. Los gru-

pos armados pueden ocupar microáreas tan pequeñas como bloques de viviendas, como ha acontecido en Medellín y Bogotá, formando un mosaico de numerosos territorios (Pécaut, 1999).

En muchos casos la violencia en las ciudades colombianas estaba y está instigada y manejada por líderes de grupos armados originarios del campo que han infiltrado los barrios marginales de las ciudades. Ése fue el caso de los paramilitares, establecidos para combatir la guerrilla, pero que se involucraron en la criminalidad organizada (Duncan, 2005); en Medellín, el Bloque Cacique Nutibara (BCN) se integró en las redes criminales ya existentes en la ciudad (Alonso, 2007). Los paramilitares entraron en las ciudades en los últimos años del siglo xx, por un lado, para combatir a la guerrilla que se infiltró cada vez más en ellas, por otro, para ocupar sitios estratégicos y reforzar su dominio en el narcotráfico.

Desde finales de 2003, se inició un proceso nacional de desmovilización de los paramilitares. Medellín, la segunda ciudad de Colombia, fue el escenario de la primera desmovilización, la del BCN. Este proceso ha llevado a una gran disminución de la violencia; 2004 fue el año más pacífico de los últimos 25, con 57 asesinatos por cada 100 000 habitantes. La autoridades de Medellín se esfuerzan por alcanzar un índice de alrededor de 35 asesinatos por cada 100 000 habitantes, poniendo así a la ciudad por debajo del promedio de América Latina (*El Colombiano*, 14-10-2004; BBC Mundo.com, 13-10-2005). Aunque oficialmente los bloques de paramilitares en varias comunas urbanas dejaron de existir, parte de los antiguos grupos parecen mantener sus redes de criminalidad intactas y, disponiendo de las armas más sofisticadas, continúan sus actividades ilícitas.

Este artículo analiza el proceso de paz con los paramilitares en Medellín. Se trata de un proceso que se realiza dentro de un contexto de violencia urbana con múltiples grupos armados y criminales, la mayoría de los cuales no participan en él. Varios criterios definen el éxito o fracaso de un programa para la desmovilización de ex combatientes, como el mejoramiento de la seguridad urbana, incluyendo los barrios populares, la reintegración de los ex paramilitares en términos de empleo y cómo los moradores ven la presencia de los ex combatientes en su barrio. El trabajo de campo para esta investigación se realizó en 2004 y 2006, y comprende 60 entrevistas con moradores de los barrios populares, miembros de organizaciones comunales y ong locales, funcionarios del municipio de Medellín y ex miembros de los grupos armados.

DESDE EL CAMPO HACIA LA CIUDAD

Para entender la dinámica de la violencia contemporánea en Colombia se necesita remontarse en la historia del conflicto armado. Los orígenes del conflicto se pueden ubicar en el periodo de La Violencia (1948-1958), cuando las tensiones entre los dos partidos tradicionales, los Conservadores y los Liberales, desembocaron en una guerra civil. La Violencia, que dejó un saldo de entre 100 000 y 200 000 muertos, llegó a su fin con el establecimiento del Frente Nacional (1958-1975), un acuerdo en el que los Conservadores y los Liberales decidieron repartir el poder, incluso una alternancia en la presidencia cada cuatro años, excluyendo así a todos los movimientos de izquierda. Fue en esa época cuando aparecieron los primeros movimientos guerrilleros, inicialmente en pequeños grupos, convencidos de que la lucha armada era la única opción para alcanzar sus ideales políticos. En las siguientes décadas los movimientos guerrilleros se expandieron por la reclutación de jóvenes en el campo y por los ingresos del tráfico ilícito de drogas (inicialmente por la cooperación o extorsión de narcotraficantes y más tarde por la producción propia de cocaína). Adquirieron armas de alta calidad gracias a sus ingresos provenientes de secuestros y el narcotráfico. Dos son los más importantes movimientos guerrilleros: las farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que cuentan con aproximadamente 16 000 combatientes; y el ELN (Ejército Nacional de Liberación), que tiene unos 4 000 (Livingstone, 2003). Ejecutan sus operaciones principalmente en el campo, pero han entrado en algunas ciudades como Medellín v la petrolera Barrancabermeja. En Medellín la guerrilla fue expulsada por el ejército nacional y los paramilitares.

En las décadas que siguieron a su fundación, los guerrilleros de las FARC, de origen campesino, que lucharon por una mejor repartición de tierras, señalaron que el país estaba pasando exactamente por lo contrario, lo que Reyes (1997) y Duncan (2005) definen como la contrarreforma agraria: una concentración de la propiedad en el campo por parte de una nueva clase de empresarios ilegales, los narcotraficantes (más tarde los paramilitares tomaron grandes parcelas de tierra). Los nuevos terratenientes se convirtieron rápidamente en objetivo de los guerrilleros que comenzaron a extorsionarlos y secuestrarlos. En reacción a las crecientes amenazas, los terratenientes fundaron grupos armados para su propia protección, las autodefensas (*Semana*, 28 de mayo de 2004). El objetivo era principalmente prevenir los secuestros de la guerrilla. Parte de las autodefensas vinieron directamente del fragmentado cártel de Medellín y mantuvieron su relación con el narcotráfico. En 1997 las autodefensas unieron en una organización nacional de paramilitares –Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)–

con el fin de derrotar a la guerrilla. Aunque el fenómeno paramilitar no era totalmente nuevo, quedaba en la oscuridad; hasta ese momento sólo había sido documentado académicamente el caso de Puerto Boyacá (Gallego, 1990; Alonso, 2007). En los siguientes años los paramilitares atacaron frentes de la guerrilla en casi todo el país, pero además perpetraron masacres contra la población civil a la que acusaron de colaborar con la guerrilla. Las AUC culparon al Estado central de no proteger a las élites regionales y de promover la guerrilla al negociar con ella. El entonces líder de las AUC, Carlos Castaño, opinó que "las AUC eran una respuesta legítima a las FARC", a las que calificó como "la más grande multinacional del crimen" (Romero, 2003: 38). En 2003 las AUC contaban con unos 11 000 miembros (Livingstone, 2003). La reciente historia de los paramilitares ha sido documentada extensamente (por ejemplo, Romero, 2003); lo importante en el contexto de la violencia urbana es que los (ex)líderes paramilitares residentes en el campo han surgido como uno de los principales instigadores de la violencia en los barrios marginales de las ciudades, sobre todo en el norte del país. Cabe anotar que no todos los grupos paramilitares se involucraron en el crimen organizado. Algunos continuaron dedicándose sólo a la lucha antiguerrillera; otros se involucraron principalmente en la criminalidad, y muchos más se ocuparon en una combinación de las dos, entre ellos los llamados narcoparamilitares (Duncan, 2005; Romero, 2003).

Aunque las AUC eran dirigidas como una organización nacional, las diferentes facciones establecieron bases de poder en sus regiones, donde impusieron sus reglas a la población civil y ejercieron un régimen de terror. Grupos de paramilitares se habían transformado en ejércitos privados al servicio de sus líderes regionales, que reinaban como verdaderos señores de la guerra. Desde sus territorios en las zonas rurales los (ex)líderes paramilitares han infiltrado las ciudades a través de redes criminales. En algunos casos, conquistaron directamente barrios populares en Bogotá, Medellín y Barrancabermeja. Para obtener el control de los barrios marginales los paramilitares eliminaron o cooptaron a grupos armados ya presentes como bandas locales. Asesinaron a los delincuentes de baja peligrosidad y crearon así una sensación de seguridad para los ciudadanos (Duncan, 2005). Como muestra el ejemplo de Medellín (aquí abajo), delitos como los robos disminuyeron, mientras que aparecieron nuevos delitos como la extorsión a empresas de transporte y la eliminación de personas que no pagaron los "impuestos" o se negaron a cooperar con las redes paramilitares.

Aparte de su estrategia a través de redes criminales, los (ex) paramilitares aprovecharon las reformas políticas de 1988 y la promulgación de la Constitución de 1991. A partir de 1988 el sistema político de Colombia entró en un proceso de descentralización. En primer lugar se estableció la elección

popular de alcaldes y gobernadores. Con la Constitución de 1991 se concedió a las regiones la atribución de ejecutar gastos sociales. Los cambios abrieron el camino para nuevos partidos políticos. Pero no sólo entraron en escena nuevos actores como partidos de izquierda, sino también grupos asociados con la guerrilla y los paramilitares. Por medio de amenazas, los grupos al margen de la ley expulsaron a los políticos que no se sometieron a su orden. Simultáneamente formaron redes clientalistas e hicieron elegir a sus propios candidatos. Así los guerrilleros y los paramilitares reforzaron sus bases de poder a través de un clientelismo armado (Duncan, 2005: 14). La competencia electoral regional entre la guerrilla y los paramilitares evolucionó hacia la lucha por territorios, lo que causó miles de muertos y cientos de miles de desplazados. En esta lucha el control de áreas con cultivos ilícitos pasó a ser un objetivo estratégico para financiar los enfrentamientos armados (Romero, 2003: 40). Finalmente los guerrilleros controlaron más bien los municipios del campo en el sur, mientras que los paramilitares llegaron al poder en el resto del país y en algunas ciudades.

VIOLENCIA URBANA EN MEDELLÍN

Medellín es el caso más destacado por el gran número de grupos armados presentes (paramilitares, guerrilla, narcotráfico, bandas) y por sus varias iniciativas de paz locales, desde el proceso de los años noventa con las milicias de izquierda hasta la reciente desmovilización de los paramilitares. La ciudad se ha expandido rápidamente en décadas recientes, formando un mosaico de barrios populares que rodean el centro. La población creció de 360 000 habitantes en los años cincuenta a alrededor de dos millones hoy en día. Emigrantes llegaron en busca de mejores oportunidades económicas; otros, provenientes del campo, vinieron a refugiarse de la creciente violencia entre la guerrilla y los paramilitares. Los nuevos moradores, normalmente casi sin recursos, se establecieron en los barrios marginales como la Nororiental con sus callejones estrechos y la Noroccidental donde el gobierno planeó algunas de las carreteras. En los años ochenta El Poblado (sureste) se convirtió en un barrio para una nueva élite, como los nuevos ricos que habían hecho su fortuna en el narcotráfico. Se dio lugar a una de la clase emergente con los ricos tradicionales que favoreció la vinculación de "gentes de bien" al negocio de la droga (Jaramillo, 1998: 33, 48; Daza, 2001: 70).

La reciente historia de Medellín se caracteriza por el auge y caída de los grupos armados. En los barrios marginales, la violencia ha surgido en formas distintas, incluyendo enfrentamientos de la guerrilla con el ejercito

nacional, operaciones de paramilitares y narcotraficantes, homicidios políticos, crimen organizado, hasta las guerras de las centenas de bandas juveniles que operan en las comunas. En relación con los grupos juveniles armados, se distinguen parches (de primera escuela y que se encuentran ocasionalmente), combos (con un territorio delimitado) y bandas (con una organización jerárquica, militar y económica) (Alcaldía de Medellín, 2005). Las bandas disponen de armas pesadas y muchas veces los líderes no son jóvenes. Grupos de delincuencia muestran asimismo una gran diversidad; entre los más temidos se encuentran las "oficinas", para la contratación de sicarios. Sin embargo, la historia de Medellín revela que la ciudad no ha estado siempre tan llena de violencia. Al contrario, en los años sesenta y setenta los barrios populares se caracterizaron por su relativa tranquilidad. Fue a comienzos de los años ochenta cuando se comenzó a hablar de un nuevo fenómeno, el de las bandas juveniles, que irrumpían en los barrios populares de la ciudad y cometían delitos menores, como atracos y robos. La ciudad cambió profundamente en los años ochenta con el auge del cártel de Medellín. Bajo el mando de su jefe Pablo Escobar se formaron grupos de sicarios que empezaron a operar al servicio del narcotráfico. No solamente mataron a otros narcotraficantes, sino también a políticos, funcionarios y empresarios que rechazaron colaborar con el cártel de las drogas. En poco tiempo se produjo una mezcla de delincuencia juvenil con narcotráfico. Cada vez más las bandas juveniles se transformaron en organizaciones de criminalidad. Y con la proliferación de las bandas se hacían más frecuentes los incidentes entre unas y otras. (Jaramillo, 1998: 59). Pablo Escobar influenció la mentalidad de los "paisas", los habitantes de Medellín. Jóvenes que anteriormente se habían esforzado por obtener un puesto de trabajo decente buscaron el dinero rápido de la delincuencia. Además, con la caída del cártel después de la muerte de Escobar en 1993, los sicarios que habían perdido su trabajo establecieron nuevas bandas de criminalidad que asolaron la ciudad por años. Las sucesivas autoridades municipales de Medellín, que tomaron varias iniciativas para mejorar la seguridad, no consiguieron acabar con esa ola de violencia. En los años ochenta el ayuntamiento promovió la conformación de comités de seguridad en los barrios. En los noventa, una innovación polémica fue la del entonces gobernador Álvaro Uribe: la creación de los Convivir (comités para la vigilancia armada) que, aunque designados para las zonas rurales, se habían promovido en la ciudad (Jaramillo, 1998: 49). Los Convivir funcionaron en Medellín oficialmente hasta 1999, en que hubo acusaciones de violación de derechos humanos; pero, según testimonios, los mismos Convivir continúan hoy en día como comités de vigilancia privada. Para Jaramillo (1998: 50) Medellín se había convertido en una de las ciudades más vigiladas.

La expansión de las bandas provocó otra reacción, especialmente en la Nororiental, donde se formaron las milicias populares. Estas milicias ilegales que adoptaron la ideología de la guerrilla se establecieron con el fin de proteger de las bandas a la población. Sin embargo, de los enfrentamientos entre los grupos armados resultó que los barrios se volvieron aún más peligrosos. No por azar surgieron las milicias en la Nororiental. una zona, la más desatendida por el Estado, de perdición y refugio de delincuentes (Jaramillo, 1998: 61). En 1994, un proceso de negociación entre el gobierno de Medellín y las milicias concluyó en su desmovilización. El acuerdo de paz incluyó que algunos miembros de las milicias fueran parte de una nueva organización de seguridad, Coosercom, para patrullar los barrios del nororiente. Coosercom dejó de existir después de algunos años, cuando se reveló que miembros suyos habían abusado de la población civil con su poder. La desaparición de Coosercom se explica, además, por sus guerras internas. En el periodo 1995-1998 se inició otro proceso de negociación, esta vez con las bandas para poner fin a los enfrentamientos en que decenas de jóvenes habían perdido la vida. Tanto la Iglesia católica como el gobierno de Medellín participaron en este proceso como mediadores. Alrededor de 60 bandas de varias partes de la ciudad llegaron a un acuerdo de paz. Aunque inicialmente los acuerdos previnieron nuevos enfrentamientos, a la larga la violencia volvió a crecer. Surgieron nuevas bandas, mientras que algunos barrios sufrieron a una sola que tenía el monopolio, como era el caso de La Terraza en algunas partes del nororiente. Finalmente el gobierno de Medellín decidió suspender la negociación con las bandas. En ese mismo periodo, grupos guerrilleros de las FARC y el ELN infiltraron algunos barrios populares de las afueras de la ciudad e instituveron allí son propios regímenes, especialmente en la Comuna 13, en el occidente de Medellín. Esas invasiones fueron el resultado de una nueva política de la guerrilla, consistente en establecer bases dentro de las ciudades, en puntos estratégicos como son en Medellín las carreteras que van al norte y el oriente del país. En el camino de los guerrilleros se cruzaron los paramilitares que se dispersaron por casi toda la ciudad (Balbín, 2004; IPC, 2003; Jaramillo, 1998; Villa Martínez, 2003). La guerrilla fue expulsada por los paramilitares; en la Comuna 13 fue el ejército nacional el que la expulsó. En 1999 los paramilitares estaban presentes en casi todos los barrios marginales de Medellín y habían tomado el control de las bandas. En el caso del Bloque Metro se trataba de paramilitares que anteriormente habían combatido a la guerrilla en el campo y que fueron enviados por sus líderes a la ciudad. El entonces recién formado BCN tuvo una estrategia mucho más exitosa: formar una red junto con las organizaciones urbanas de alta criminalidad, incluyendo "oficinas", bandas y grupos de narcotraficantes. El BCN finalmente expulsó al Bloque Metro de la ciudad, consiguiendo así el control en la mayoría de los barrios populares (Alonso, 2007; Balbín, 2004; Noche y Niebla, 2003; Salazar, 1994; Vélez Rendón, 2001; Villa Martínez, 2003; Washington Post, 24-10-2002).

LA VIDA COTIDIANA CON LOS GRUPOS ARMADOS

La importancia de un proceso de paz se ve especialmente en el impacto que los grupos armados producen en la vida cotidiana de los barrios populares. Pécaut (1999) introdujo la noción de la "banalidad de la violencia": con la proliferación de los grupos armados, la violencia se había convertido en rutina o en algo "normal". Especialmente los paramilitares y los guerrilleros establecieron su propio orden como un dictadura local (en estos casos, otros grupos como las bandas fueron quedando bajo su control y dejaron de operar independientemente). Los movimientos armados ilegales que intentaron controlar un barrio pasaron por ciclos que incluían la confrontación, la adaptación, la inserción y el control, la descomposición y, de nuevo, la confrontación. Siempre el grupo armado imponía a la población sus propias leyes. Eso aconteció especialmente en la Comuna 13 de Medellín, donde varios grupos guerrilleros se habían infiltrado (en la Comuna 13 el ejercito nacional expulsó a la guerrilla y luego entraron los paramilitares). La Comuna 13, en el oeste de la ciudad, cuenta con unos 200 000 habitantes. Sorprendentemente, los moradores, al inicio, no tuvieron problemas con la entrada de la guerrilla, como recuerda Manuel Ramírez:*

Al principio los guerrilleros tenían una influencia positiva. Imponían un tipo de orden, acabaron con los robos, porque, como dijeron, querían dar un buen ejemplo a los niños. Los guerrilleros tomaron la iniciativa de organizar eventos culturales con música, baile y videoconciertos. Fue divertido. En los primeros meses no teníamos problemas con ellos.

(Manuel Ramírez, entrevista, abril de 2004)

Sin embargo, después los guerrilleros cambiaron su actitud drásticamente y empezaron a utilizar la violencia arbitraria en contra de la población. "Amenazaron a todos los que recusaron cooperar y luego los mata-

 $[\]ast$ Los nombres de algunos de los entrevistados en los barrios populares de Medellín han sido cambiados.

ron", dijo Ramírez. En la Comuna 13 habían entrado guerrilleros de varios movimientos. Los moradores afirman que los del ELN (y su secesión, el CAP) eran más humanos que los de las FARC. Todos los grupos imponían sus propias leyes a la población, pero las reglas de las FARC eran más rigurosas, incluían el toque de queda, la prohibición de llevar visitantes al barrio y el cobro de "impuestos revolucionarios" a los dueños de tiendas y medios de transporte. Además, los guerrilleros actuaban como jueces. La sentencias de las FARC incluían desde limpiar las calles hasta la pena de muerte (en caso de robo). Los guerrilleros (y más tarde los paramilitares) reclutaron combatientes dentro de los barrios marginales. Con las escasas oportunidades de encontrar empleo, muchas jóvenes aprovecharon esta "oportunidad". Una de ellas era Chila, una guerrillera con quien me encontré poco después de que ella desertara del movimiento CAP en la Comuna 13. Decidió unirse al grupo rebelde a través de un amigo que la convenció de participar en los entrenamientos.

En la tarde teníamos clases sobre la ideología: Lenin y Che Guevara. En la noche teníamos los entrenamientos militares, practicar con pistolas y otras armas, todo era realidad desde el principio. Asistí a los entrenamientos en secreto, tampoco mis padres lo sabían. Por un lado era fascinante, por otro lado tenía miedo porque, si los paramilitares lo descubrían, podrían asesinar a mis padres. Fue una aventura, pero con gran riesgo.

(Chila, entrevista, abril de 2004)

El régimen y la represión de los guerrilleros contrastan con los de los paramilitares en la Comuna 13 algunos años después. Estos últimos operaron más en secreto, no asesinaron a personas abiertamente, sino que hicieron desaparecer a las que supuestamente tenían ideas políticas de izquierda. Nelly Arango, una moradora de la Comuna 13, describió las diferencias entre la guerrilla y los paramilitares así:

En este barrio, con los paramilitares, reina la ley de silencio. Fue mejor con los guerrilleros, porque actuaron abiertamente. Había enfrentamientos, pero por lo menos se sabía de dónde venían las balas. Con los paramilitares todo acontece en secreto. No sabemos exactamente quiénes son los responsables por los desaparecidos.

(Nelly Arango, entrevista, abril de 2004)

Como la guerrilla, los paramilitares introdujeron sus reglas para controlar la vida cotidiana en los barrios marginales. Prohibieron reuniones informales en las calles, y exigieron impuestos a los dueños de tiendas, su-

permercados, autobuses y taxis. Cuando tomaron el control de la Comuna 13 anunciaron 400 vacantes. Muchos jóvenes, sin más oportunidades de empleo, decidieron enlistarse. Según una encuesta entre desmovilizados del BCN (Alcaldía de Medellín, 2005), las principales motivaciones de los jóvenes para ingresar al paramilitarismo eran amenazas contra su vida (25%), venganzas personales (25%) o necesidades económicas (23%).

Los habitantes de los barrios populares de Medellín tenían sus propios métodos para vivir con los grupos armados. Se impusieron restricciones para ciertos lugares y horas, evitaron ir a las calles consideradas inseguras y cerraron sus casas temprano en la noche. La violencia conllevaba también restricciones en cuanto al tiempo. Para los moradores era difícil imaginar planes de largo plazo; en los barrios afectados por la violencia, dejaban de hacerlos aun para los años inmediatos. Los dueños de negocios no tenían la confianza para invertir y de esa manera la violencia afectó la economía local (Villa Martínez, 2003; Restrepo, 2004: 181).

El proceso de paz con los paramilitares

La situación en Medellín ha cambiado como resultado del proceso de negociación con los paramilitares que comenzó en 2002, cuando las AUC anunciaron unilateralmente una tregua. La tregua y las siguientes negociaciones fueron motivadas por las divisiones internas de los paramilitares, la empeorada imagen pública y por el deseo de algunos de los comandantes de evitar una extradición a los Estados Unidos por narcotráfico. En 2003 el presidente Álvaro Uribe permitió al entonces alcalde de Medellín, Luis Pérez, comenzar el experimento de un acuerdo con el BCN. Fue la primera vez que en Colombia se llegó a un acuerdo con una organización paramilitar. En el proyecto piloto de Medellín se exigió que los paramilitares no se hubieran involucrado en algún tipo de violación de los derechos humanos. Por eso se eligió al BCN, formado recientemente pero con una presencia masiva en las comunas de Medellín. El 25 de noviembre de 2003, durante una ceremonia oficial, los primeros 874 paramilitares entregaron sus armas (The New York Times, 26-11-2003; Washington Post, 26-11-2003).

A nivel nacional, el gobierno del presidente Uribe llegó a un primer acuerdo con las AUC el 15 de julio de 2003. Las negociaciones continuaron en una zona de concentración de la cúpula paramilitar en Santa Fe de Ralito (provincia de Córdoba, al norte del país). La intención era llegar a la desmovilización de todos los bloques. La Ley de Justicia y Paz, que da un marco jurídico a las desmovilizaciones, fue aprobada por el Congreso en

junio de 2005. Esta ley establece, entre otras cosas, que las penas máximas para los ex combatientes serán de entre cinco y ocho años de cárcel. Organizaciones de derechos humanos temen que la ley pueda desembocar en la impunidad para paramilitares que han cometido crímenes de guerra, mientras las víctimas casi no reciben indemnizaciones (*El Tiempo*, 23-6-2005). A finales de 2005, más de 20 bloques de paramilitares de todo el país habían dejado las armas (Alto Comisionado para la Paz, octubre de 2005).

El desarme es el primer paso de un proceso llamado DDRR (desarme, desmovilización, reinsertación y reintegración). En la práctica, desarme casi nunca significa que todas las armas serán entregadas, pero por los menos se muestra la voluntad de la agrupación de participar en un proceso de paz. El segundo paso, desmovilización, incluye el desmantelamiento de la estructura de la organización. Durante la reinserción, el regreso a la vida civil, los ex combatientes muchas veces se sienten vulnerables y les faltan oportunidades para generar ingresos. Si los problemas persisten los desmovilizados fácilmente pueden volver a su vida anterior de combatientes. Reintegración es un proceso de largo plazo y que incluye la participación de los desmovilizados en las actividades sociales, económicas y políticas en sus barrios (Knight, 2004).

Después de la ceremonia de Medellín, los desmovilizados del BCN participaron en el programa del gobierno local "Regreso a la Legalidad", con proyectos de entrenamiento para la generación de ingresos y de ayuda psicosocial. El programa prevé la integración completa en la sociedad, incluyendo la membresía en organizaciones sociales y políticas de los barrios. Medio año después de la ceremonia, la gran mayoría de los desmovilizados había encontrado trabajo y participado de una manera u otra en actividades de sus barrios (El Colombiano, 23-5-2004). Inicialmente el regreso de los desmovilizados a sus barrios causó tensiones, particularmente cuando querían participar en las reuniones de las elegidas Juntas de Acción Comunal (JAC). Los primeros ex paramilitares fueron elegidos como miembros de las JAC, aunque no se excluye que algunos grupos armados hayan presionado a los electores. En agosto 2004, 76% de los moradores consideraron como positiva la presencia de los desmovilizados en el barrio; en enero de 2005, la cifra había aumentado hasta 88% (Alcaldía de Medellín). La revista Semana (abril de 2005) atribuye los resultados en gran parte a los fondos de la municipalidad de Medellín para la educación y a los subsidios los para crear puestos de trabajo. Son estos tipos de subsidio los que hasta ahora faltan en otros municipios con recientes desmovilizaciones de paramilitares. El mayor éxito, no obstante, fue una reducción espectacular de la violencia. En septiembre de 2004 el número de asesinatos llegó a su nivel más bajo en 30 años y se espera que esa tendencia continúe (El Colombiano, 14-10-2004).

nalidad. Esta cooperación entre paramilitares y grupos criminales data de años atrás. Para encontrar una solución al respecto las autoridades podrían ampliar el proceso local de paz, de manera de no sólo atender a los paramilitares, sino también de concebir una estrategia para confrontar a los grupos criminales. En Medellín, así como en otras ciudades con fuerte presencia de narcotraficantes u otros grupos criminales, estos tipos de redes podrían establecerse en el caso del surgimiento de un grupo paramilitar. Sin una estrategia hacia otros grupos armados, el proceso de paz en un contexto urbano se torna vulnerable a largo plazo.

Bibliografía

- Alcaldía de Medellín (2005), Programa Paz y Reconciliación. Regreso a la legalidad, Medellín.
- Alonso Espinal, Manuel, Jorge Giraldo Ramírez y Diego Jorge Sierra (por publicarse en 2007), "Medellín: el complejo camino de la competencia armada", en M. Romero (ed.), Seguimento a los procesos de díalogo y negociación emprendidos por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris.
- Alto Comisionado para la Paz (2005), Desmovilizaciones realizadas, internet: www.alto comisionadoparalapaz.gov.co/desmovilizaciones
- Balbín, Jesús (2004), "Politik: Eine Demobilisierung mit vielen Fragen", en *Kolumbien aktuell, no. 380*, internet: www.kolumbien-aktuell.ch/Publikationen/ka380.html
- Daza, Ana (2001), "Entre esquinas, cambuches, cruces y callejones", en Ana Daza, Gustavo Salazar y Libardo González, Experiencias de intervención en conflicto urbano, tomo II, Alcaldía de Medellín.
- Duncan, Gustavo (2005), Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra. Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE.
- Gallego, Carlos Medina (1990), Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia, Bogotá, Documentos Periodísticos.
- IPC (Instituto Popular de Capacitación) (2003), "Breve recuento de los actores armados en Medellín, década del 90", *Boletín Virtual 04 Por la vida*', internet: www.corporacionpp.org.co/actualidad_Boletin_VirtualVida04.htm
- Jaramillo Arbeláez, Ana María, Ramiro de J. Ceballos Melguizo y Marta Inés Villa Martínez (1998), En la encrucijada. Conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa, Medellín, Corporación Región.
- Kaldor, Mary (2001), New & Old Wars. Organized Violence in a Global Era, Cambridge, ик, Polity.
- Knight, Mark y Alpaslan Özerdem (2004), "Guns, Camps and Cash: Disarmament, Demobilization and Reinsertion of Former Combatants in Transitions from War to Peace", *Journal of Peace Research*, vol. 41, núm. 4, pp. 499-516.

- Koonings, Kees y Johan Leestemaker (2004), "The Demise of a Model? Industrialists, Globalization and Violence in Medellin since 1980", en Dirk Kruijt, Paul van Lindert y Otto Verkoren (eds.), State and Development, Essays in Honour of Menno Vellinga, Amsterdam, Rozenberg.
- Kruijt, Dirk (2004), "Exclusión social y violencia urbana en América Latina", Foro Internacional, vol. XLIV, núm. 4, pp. 746-764.
- Leeds, Elizabeth (1996), "Cocaine and Parallel Politics in the Brazilian Urban Periphery: Constraints on Local-level Democratization", *Latin American Research Review*, vol. 31, núm. 3, pp. 47-84.
- Livingstone, Grace (2003), *Inside Colombia. Drugs, Democracy and War,* Londres, Latin America Bureau.
- Noche y Niebla (conjunto de CINEP y Justicia y Paz) (2003), Comuna 13, la otra versión, Bogotá, internet: www.nocheyniebla.org/com1301.htm
- Pécaut, Daniel (1999), "From the Banality of Violence to Real Terror: The Case of Colombia", en Kees Koonings y Dirk Kruijt (eds.), Societies of Fear, the Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America, Londres y Nueva York, Zed Books.
- Restrepo, Luis Alberto (2004), "Violence and Fear in Colombia: Fragmentation of Space, Contraction of Time and Forms of Evasion", en Kees Koonings and Dirk Kruijt (eds.), Armed Actors, Organised Violence and State Failure in Latin America, Londres y Nueva York, Zed Books.
- Reyes, Alejandro (1997), "Compra de tierras por narcotraficantes", en Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social, PNUD/UNDP.
- Romero, Mauricio (2003), *Paramilitares y autodefensas*, 1982-2003, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, IEPRI.
- Salazar, Alonso (1994), "Young Assassins of the Drug Trade", en *Nacla Report on the Americas*, mayo/iunio.
- ———— (2002), No nacimos pa' semilla. La cultura de las bandas juveniles en Medellin, Bogotá, Planeta.
- Tokatlian, Juan (2000), Globalización, narcotráfico y violencia. Siete ensayos sobre Colombia, Bogotá, Norma.
- Vélez Rendón, Juan Carlos (2001), "Conflicto y guerra: la lucha por el orden en Medellín", *Estudios Políticos*, núm.18, enero-junio, Medellín.
- Villa Martínez, Marta Inés, Luz Amparo Sánchez Medina y Ana María Jaramillo Abeláez (2003), Rostros del miedo, una investigación sobre los miedos sociales urbanos, Medellin, Corporación Región.

Artículos

- BBC Mundo.com (2005), "En Medellín se puede hablar", 13 de octubre, Londres. El Colombiano (2004), "Cifras dicen que Medellín es más segura", 14 de octubre, Medellín.
- El Colombiano (2004), "Desmovilizados llegaron a las JAC", 23 de mayo, Medellín.

El Tiempo (2005), "Human Rights Watch pidió a Suecia y Holanda retirar apoyo a misión de la OEA en proceso con 'paras'", 23 de junio, Bogotá.

Semana (2004), "Los señores de las tierras", 28 de mayo, Bogotá.

Semana (2005), "El Pacificador", 25 de abril, Bogotá.

The New York Times (2003), "800 in Colombia Lay Down Arms, Kindling Peace Hopes", 26 de noviembre.

Washington Post (2002), "Urban Anti-rebel Raid a New Turn in Colombian War", 24 de octubre.

Washington Post (2003), "Colombian Militiamen Turn in their Weapons", 26 de noviembre.